

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS DEL “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y ALOJAMIENTO EN VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS”

El fenómeno del envejecimiento en las sociedades desarrolladas, como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, hace necesario que las administraciones públicas desarrollen políticas dirigidas a la población mayor con el objetivo de fomentar la promoción de su autonomía y el promover medidas preventivas de hábitos saludables y de autocuidado entre las personas mayores.

Según los datos provisionales a 1 de enero de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas mayores de 65 años representan el 17,5% de la población de la Comunidad de Madrid, siendo el 48% hombres y el 52% mujeres. Las proyecciones poblacionales realizadas por el INE indican que la población mayor de 65 años en diez años alcanzará el 23% en nuestra comunidad.

Según Eurostat, Oficina Estadística de la Unión Europea, en su informe de 2016, la esperanza de vida media en la Comunidad de Madrid es de 84,9 años, siendo en los hombres 81,9 años y en las mujeres 87,6 años. Además el 22% de las personas mayores de 65 años viven solas, si bien en el caso de las mujeres supone el 30%.

Así pues, atendiendo a esta realidad y teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad de las personas mayores que viven solas, la Consejería de Políticas Sociales y Familia se ha propuesto desarrollar un Programa de viviendas compartidas para personas mayores con el fin de paliar algunas de las circunstancias adversas que conlleva el hecho de vivir solo, como es la percepción del sentimiento de soledad, la pérdida de poder adquisitivo, el empobrecimiento de las relaciones sociales, la reducción de las actividades fuera del hogar, los problemas derivados de la salud (Iglesias de Ussel, 2001; Díez Nicolás y Morenos Páez, 2015).

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, establece en el artículo 23 como sector de atención a las personas mayores, estableciendo las líneas fundamentales de actuación de los servicios sociales con este sector, entre las que destacan el favorecer la atención integral de las necesidades que se planteen en esta etapa de la vida, facilitando el mantenimiento de la persona mayor en su medio, a través de medidas que posibiliten su permanencia en hogar propio o familiar.

En esta misma línea, La Estrategia de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, 2017-2021, en la línea estratégica nº 2 (“Promover medidas enfocadas a la atención de personas mayores autónomas en dificultad social”), establece como medida a desarrollar el Programa de viviendas compartidas para personas mayores.



Para el desarrollo de esta estrategia resulta imprescindible la contratación con empresas externas al no disponer la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor y por ende la Consejería de medios adecuados ni suficientes para la prestación del servicio propuesto.

Por ello la Consejería de Políticas Sociales y Familia considera necesario tramitar un contrato de servicios para su gestión en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público. Este contrato promueve la gestión de un servicio de promoción de la convivencia y alojamiento en viviendas compartidas para personas mayores autónomas que contempla un máximo de 30 usuarios en 10 viviendas compartidas.

Se entiende por viviendas compartidas aquellos alojamientos de titularidad privada que son compartidos por dos o más personas, no relacionadas parentalmente, a partir de un acuerdo o contrato, donde por lo general, los dormitorios son de uso privado y el resto de las estancias de la vivienda son compartidas, y donde la convivencia se rige por unos acuerdos establecidos por las partes intervinientes.

El objetivo general del servicio es dar respuesta a las necesidades de compañía y alojamiento que presentan algunas personas mayores, además de contribuir en la mejora de los siguientes aspectos:

1. Disminuir la sensación de soledad y aislamiento que sufren muchas de las personas mayores que viven solas, generando nuevas oportunidades de relaciones interpersonales y sociales.
2. Mantener a las personas mayores en su domicilio o entorno habitual, evitando institucionalizaciones innecesarias.
3. Promover su autocuidado y hábitos saludables y fomentar su autonomía e independencia.
4. Paliar las necesidades económicas que presentan algunas personas mayores, al compartir los gastos de alojamiento y los derivados del mismo con otras personas, optimizando sus propios recursos.

Conforme a lo anteriormente expuesto la entidad adjudicataria del contrato se hará cargo de la supervisión del funcionamiento de las viviendas compartidas, así como de la mediación y coordinación de la convivencia entre los usuarios, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que en cada momento se establezcan desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Las funciones de la entidad adjudicataria serán por tanto las siguientes:

1. Selección y propuesta de unidades convivenciales atendiendo a los gustos, preferencias y necesidades detectadas.



2. Favorecer la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas mayores que participan en el servicio y velar por su efectividad en el entorno compartido.
3. Realizar propuestas de intervención dentro de las viviendas en relación a actividades a desarrollar por las propias personas residentes así como a proponer modificaciones dentro de la vivienda para mejorar su habitabilidad.
4. Realizar el seguimiento y evaluación del programa.

Con las viviendas compartidas se pretende ofrecer una alternativa estable y normalizada de alojamiento y soporte que posibilite un proceso de mantenimiento, participación y normalización de la convivencia de las personas mayores autónomas en su entorno habitual, apoyándose en una supervisión flexible y ajustada a las diferentes necesidades de cada vivienda, a través de un equipo de supervisión que dará el apoyo oportuno a los usuarios tanto en la convivencia dentro de la vivienda, como en la participación en el entorno comunitario.

La duración del contrato se prevé sea de un año prorrogable por otro más en virtud de la legislación vigente comenzando la ejecución del mismo el 1 de enero de 2019.

Madrid, a fecha de firma
EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Fdo.: Carlos González Pereira

